


A LA MESA DEL CONGRESO

FRANCESC HOMES I MOLIST, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Català, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores, una PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA HACER FRENTE A LA CRISIS HUMANITARIA DE LOS REFUGIADOS.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 21 de septiembre de 2016.



Francesc Homs i Molist
Diputado (PDC)
Portavoz Grupo
Parlamentario Mixto

PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA HACER FRENTE A LA CRISIS
HUMANITARIA DE LOS REFUGIADOS

ANTECEDENTES

El pasado mes de julio se cumplió un año del primer acuerdo del Consejo Europeo sobre reubicación y reasentamiento de personas solicitantes de asilo y es increíble, inexplicable e indignante la pasividad de las autoridades europeas y españolas para llevar a cabo este proceso.

Hasta el momento, se han realizado poco más de 3.000 reubicaciones y poco más de 7.000 reasentamientos, y es evidente, que estas cifras están muy lejos de los compromisos alcanzados en julio del año pasado y de los ampliados en septiembre.

La Guardia costera italiana por ejemplo, informaba a finales de agosto de este año, concretamente el día 30, que había coordinado el rescate de unos 6.500 migrantes a lo largo del día, en un solo día, en el Mediterráneo, frente a las costas libias. En la misma jornada, cerca de 460 desplazados llegaban a las islas griegas desde Turquía, a pesar del acuerdo que la UE cerró con Ankara en marzo para cerrar la ruta. Está claro que el volumen de demanda y las necesidades siguen su curso y que la actitud y la práctica de las autoridades europeas una senda muy distinta.

El pasado 2 de septiembre el Congreso de los Diputados y otras instituciones y administraciones del Estado se sumaban a la campaña #Light4Refugees promovida por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado en el aniversario de la muerte del niño sirio de

tres años, Aylan Kurdi, que apareció ahogado en una playa de Turquía, y en recuerdo de todas las víctimas de la crisis humanitaria de refugiados fallecidos en el Mediterráneo. Y tras un año, ¿qué ha cambiado?

En 2016 han muerto cerca de 3.000 personas en el Mediterráneo en su intento por alcanzar Europa y poner su vida a salvo del conflicto y la pobreza. Una cifra cercana a las que la UE ha conseguido reubicar desde el pasado septiembre. De seguir con este ritmo, la UE tardaría 43 años en cumplir con las reubicaciones a las que se comprometió. Y los niños representan un porcentaje desproporcionado y creciente de todos los desplazados. Entre 2005 y 2015 el número de niños refugiados se ha duplicado y hoy, suponen casi la mitad de todos los refugiados que hay en el mundo. Además, cada vez hay más menores que cruzan solos las fronteras: en 2015 unos 100.000 niños no acompañados solicitaron asilo en 78 países, el triple que en 2014.

La realidad no se corresponde ni con la actuación de la UE ni con los acuerdos alcanzados, los ha superado y los supera cada día. En 2015 las personas que llegaron a Europa pasaron del millón y durante este año, esta cifra asciende ya a más de 245.000 según la Organización internacional para las Migraciones (OIM).

Ni la UE ni el Gobierno español están siendo capaces de estar altura y no parecen tener voluntad de poner remedio a esta crisis humanitaria que afecta a millones de personas.

Las decisiones y las acciones parecen estar más dirigidas a impedir la llegada de solicitantes de asilo que en ofrecer un lugar de acogida digno. Tanto la UE como el Gobierno español deberían asumir su

responsabilidad y poner todos los medios necesarios para agilizar los procesos de reubicación y reasentamiento, para atender a millones de personas que buscan y necesitan refugio, así como para abordar las causas de sus desplazamientos forzados.

Los últimos acontecimientos en Turquía suponen además, una nueva muestra de que éste no es un país seguro y que no ofrece las mínimas garantías de acogida para los refugiados que son expulsados desde Grecia. La UE debería hacer marcha atrás en su acuerdo y centrar sus esfuerzos en garantizar la protección internacional de quienes huyen de la guerra.

A pesar de la inacción del Gobierno español para acoger a las personas refugiadas, otras administraciones como por ejemplo la Generalitat de Catalunya, han manifestado reiteradamente su voluntad de contribuir, mejorar y resolver la situación de estas personas y han impulsado actuaciones para participar e intervenir activamente, en el caso de la Generalitat, amparada en el art. 138 del Estatuto de Autonomía de Catalunya que le reconoce competencias de acogida e integración de personas extranjeras.

La decisión de los Ministros de Justicia e Interior de la UE para reubicar 160.000 demandantes de asilo, en un periodo de 2 años, supondrá que los estados miembros recibirán 6.000€/año por persona acogida. El Estado español deberá asumir 17.000 personas refugiadas por el flujo migratorio que puede suponer esta reubicación, y a Catalunya podrían llegar unas 5.000 personas.

Ante esta crisis humanitaria tanto las administraciones autonómicas como las administraciones locales han mostrado su predisposición a colaborar en el reasentamiento y reubicación de personas refugiadas

de manera solidaria. Pero para que además esta voluntad sea efectiva, el Gobierno del Estado debería operar activamente y de manera leal en esta materia, con estas otras administraciones, de forma coordinada, facilitando información, datos, posibilitando la previsión, la toma de decisiones lo más próximas posibles al proceso de acogida e integración, y transfiriendo los recursos procedentes de la UE para la efectiva atención de estas personas.

La comunidad internacional ha tenido este mes de septiembre dos importantes oportunidades en las que asumir compromisos de respuesta a esta terrible crisis. Los acuerdos adoptados tanto en la cumbre de las Naciones Unidas como en la cumbre convocada por el Presidente Obama, contribuirán a la toma de decisiones y medidas para proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas pero probablemente, sea necesario complementar estos acuerdos, aprovechar nuevas oportunidades para seguir avanzando, para que los compromisos se concreten en mayor medida y para que efectivamente se dé una respuesta adecuada al reto que representa la crisis humanitaria a la que nos enfrentamos.

Por todo ello, los diputados y diputadas del Partit Demòcrata Català presentan la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de forma urgente a:

- Asumir los compromisos adoptados en las dos cumbres de alto nivel celebradas los días 19 y 20 de septiembre (convocadas por Naciones Unidas y por el Presidente de EE.UU) de modo que

se materialicen de forma urgente e inmediata para garantizar y proteger los derechos de las personas migrantes y refugiadas, en la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Y a desarrollar un rol proactivo para el establecimiento de compromisos concretos, en cualquier reunión que en el ámbito internacional, se lleve a cabo con el objetivo de atender y mejorar la situación de las personas migrantes demandantes de refugio.

- Impulsar y apoyar la revisión y adecuación del Reglamento de Dublín, en el marco de la reforma y construcción de un auténtico Sistema Europeo Común de Asilo, de modo que responda al volumen de la demanda, suponga un reparto de responsabilidades sostenible y garantice una tramitación ágil.
- Retirar el apoyo de España al acuerdo entre la UE y Turquía instando de forma inmediata a la suspensión de su aplicación y a su impugnación ante las vías existentes al efecto.
- Acoger de forma inmediata en España y en condiciones dignas, a las personas refugiadas que se encuentran en Grecia e Italia en cumplimiento de los acuerdos de reubicación adoptados por el Consejo Europeo.
- Poner en marcha vías legales y seguras de acceso al procedimiento de asilo: habilitando la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados españoles; facilitando la emisión de visados humanitarios y de estudios; cumpliendo los compromisos adquiridos en materia de reasentamiento y aprobando un programa ambicioso y permanente de

reasentamiento; y flexibilizando los requisitos de reagrupación familiar.

- Eliminar los obstáculos para el acceso al derecho de asilo poniendo fin a las devoluciones colectivas y sumarias de personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla, y suprimiendo la exigencia de visado de tránsito aeroportuario impuesto en 2011 a personas de nacionalidad siria.
- Implementar acciones concretas para mejorar la protección de los menores refugiados como acabar con la detención de niños migrantes, mantener unidas a las familias para proteger a los menores, conceder a los menores la misma protección que al progenitor solicitante aunque no conste la conformidad del otro progenitor por no estar localizable, o cuando la madre haya obtenido protección por violencia de género, y garantizar el acceso a la educación a todos ellos.
- Trasponer inmediatamente las directivas europeas en materia de asilo y aprobar urgentemente el reglamento que desarrolla normativamente la Ley de Asilo, pendiente desde hace años.
- Adoptar un Plan de Acogida e Integración con medidas concretas tales como la revisión de la legislación y práctica en materia de asilo, para garantizar procedimientos con todas las garantías en línea con los estándares internacionales, entre otras.
- Dotar de las mismas ayudas económicas a los refugiados, con independencia de que se alojen en recursos de gestión directa

de la Administración o indirecta (Organizaciones No Gubernamentales).

- Incorporar personal a la plantilla de la Oficina de Asilo y Refugio para ocupar puestos de intérpretes con la cualificación necesaria, y renovar su sistema informático para mejorar la gestión y publicación de las estadísticas sobre protección internacional, diferenciando los datos sobre género o pertenencia a colectivos vulnerables e incluyendo los tiempos medios de resolución de los expedientes.
- Facilitar y compartir la información sobre las personas refugiadas que llegarán a España con las Comunidades Autónomas.
- Posibilitar y fomentar una participación activa de otras administraciones para que trabajen en coordinación con el resto de actores que intervienen en la acogida e integración y reforzar sus servicios para acoger e integrar con éxito a las personas refugiadas, adaptándolos a los perfiles de personas vulnerables tales como víctimas de tortura, trata, violencia de género o menores.
- Establecer protocolos de cofinanciación con la Generalitat de Catalunya para que ésta pueda gestionar los fondos procedentes de la UE para la acogida de personas refugiadas.
- Implantar procedimientos de evaluación del sistema de acogida que permitan valorar si se responde adecuadamente a las necesidades de integración de los refugiados.